

ANA CARRIGAN

El Palacio de Justicia

UNA TRAGEDIA COLOMBIANA

Traducción de Clorinda Zea

Epílogo de Constanza Vieira

icono •

ICONO •

Título original:

The Palace of Justice: A Colombian Tragedy

©1993, 2009, Ana Carrigan

©De la traducción: Clorinda Zea

©Del Epílogo: Constanza Vieira

De esta edición:

©2009, Icono Editorial Ltda.

Carrera 10 A No. 70-62

Teléfono: (57-1) 317 8905

TelFax: (57-1) 317 8898

Bogotá, D.C., Colombia

www.iconoeditorial.com

Diseño:

Nancy Cruz

Fotoilustración de cubierta:

Gerardo Marulanda

Fotografías:

Voz, Instituto de Medicina Legal, archivos familiares

Agradecimientos especiales a:

Colombian Studies Institute

Latin American and Caribbean Center

Florida International University,

por la gestión y obtención de recursos

para la traducción de este libro.

ISBN: 978-958-8461-06-9

Primera edición: octubre de 2009

Primera reimpresión: enero de 2010

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial

de esta publicación, mediante cualquier sistema,

sin previa autorización escrita de la editorial.

Contenido

Prólogo	17
----------------	----

Parte I

Capítulo 1	
Antecedentes	67

Capítulo 2	
La Corte sitiada	95

Capítulo 3	
La búsqueda de rehenes	113

Capítulo 4	
El contraataque	123

Capítulo 5	
Nadie llama al magistrado	137

Capítulo 6	
La radio	151

Capítulo 7	
El otro Palacio	165

Capítulo 8	
El Palacio en llamas	179

Capítulo 9	
La noche	193

Capítulo 10	
Pesadillas y fantasmas	209

Capítulo 11	
Los emisarios	219
Capítulo 12	
El personaje	243
Capítulo 13	
Otra página de gloria	269
Capítulo 14	
Operación Limpieza	301
Parte II	
<hr/>	
Capítulo 15	
El pacto de silencio	325
Posdata	
El Palacio de Justicia, octubre de 2009	339
Epílogo	
<i>Por Constanza Vieira</i>	347

Prólogo

BOGOTÁ, MARTES 9 DE ABRIL DE 1991. Mi primera noche de regreso a Bogotá después de cinco años. Esa fragancia en el aire: la mezcla de eucaliptos y tierra roja de los Andes en el enrarecido aire de las montañas. Inconfundible. Con los ojos vendados y los oídos tapados, podría decir en cinco segundos dónde me encuentro. He conocido esta fragancia única de Bogotá desde que era una niña pequeña. Al aspirarla ahora me remonto no cinco años atrás, cuando mi última visita, sino a mi primer encuentro de niña con el país de mi madre.

Los andenes de entonces eran más limpios y también más seguros. Las mujeres indígenas llegaban por la mañanita con sus burros cargados de frutas y verduras y se detenían a la sombra a vender sus productos. «¡Aguate, papas, fríjoles frescos...!» Si cierro los ojos todavía puedo escuchar las cadencias de sus gritos llamando a las cocineras de las casas en la calle donde vivía mi tía. Recuerdo que por la noche llegaron músicos a tocar bajo la ventana de mi madre, festejando su regreso a la ciudad natal que había abandonado hacía tantos años para casarse con un novio europeo. La tradición impedía que encendiéramos la luz o miráramos hacia afuera; así que, en la oscuridad, la ficción del anonimato de sus admiradores se preservaba estrictamente y, acurrucadas debajo de la ventana abierta, esperábamos las primeras notas rítmicas de las guitarras, seguidas de voces masculinas que se alzaban en lamentos apasionados de corazones desgarrados, amores perdidos, sueños rechazados. Esos vozarrones, esas guitarras fluidas en la noche bogotana trajeron otra cultura, otro mundo de romance y misterio a mi niñez.

¿Alguna vez fue así? Yo lo creía. ¿Y en qué momento se transformó? ¿Desde cuándo un país rico, sofisticado, de vastos recursos naturales y culturales se convirtió en un lugar donde una población de 45 millones parece condenada a tambalearse convulsivamente de un trauma al siguiente?

De casualidad, en 1985 yo estaba en Bogotá durante una de esas convulsiones, una tragedia cuyas consecuencias han afectado la vida de Colombia. Una mañana de noviembre de ese año, 35 guerrilleros fuertemente armados del movimiento revolucionario M-19 invadieron el Palacio de Justicia en el corazón de la histórica plaza de Bolívar. El Ejército colombiano respondió de inmediato con un asalto militar con tanques, vehículos blindados, explosivos, bombas y más de mil soldados. Mientras el combate se libraba dentro y fuera del Palacio de Justicia, a tres cuadras, el Gobierno de entonces, reunido en el Palacio Presidencial, se hizo a un lado.

Cuando los guerrilleros atacaron había más de cuatrocientas personas atrapadas en la imponente edificación, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Estaba allí la casi totalidad de la jerarquía jurídica del país y su personal. El combate entre el Ejército y la guerrilla duró 27 horas sin interrupción y terminó a las 2:30 de la tarde siguiente. Más de doscientas personas –entre ellas once magistrados de la Corte Suprema– murieron, incluyendo un teniente del Ejército y ocho policías, algunos víctimas del fuego cruzado de la propia fuerza pública. Asimismo, un desconocido número de personas «desapareció», y el interior del Palacio de Justicia quedó reducido a ruinas debido al fuego y a los explosivos. Cuando terminó todo, como ha pasado siempre aquí, se construyó la «versión oficial» de lo sucedido y se divulgó con rapidez a los medios nacionales e internacionales.

En el proceso de reescribir la historia de esos días de noviembre fue necesario tejer múltiples eufemismos en torno a como ocurrieron los acontecimientos, clavados en un tiempo real; en una ubicación física concreta; en el corazón de la capital del país; con cadáveres verdaderos, con desaparecidos y sobrevivientes; y con los restos incinerados del otrora gran edificio.

El que a lo largo de los dos días que duró la batalla los hechos se presentaran bajo el brillo de los reflectores y las cámaras de televisión, se constituyó en un reto especial para los guionistas del escenario oficial. No obstante, como lo demuestra la historia,

era un desafío para el que estaban bien preparados. Hoy en día, muchos aspectos de la versión oficial, en particular el central acerca de la participación de la mafia de las drogas, han sobrevivido casi intactos.

Es raro que un solo evento pueda arrojar luces sobre toda una época. Pero así fue la tragedia del Palacio de Justicia; en los años siguientes, desde el fondo del palimpsesto de la invención y la distorsión impuesta sobre los hechos por los promotores institucionales, han venido saliendo a la luz pedacitos de la historia no contada: rasgados, desconectados, petrificados, como los fragmentos de una pesadilla viva y caótica; estos breves vistazos sobre la verdad de lo que ocurrió siguen persiguiéndome. Hoy he regresado a Bogotá por segunda vez desde el asalto al Palacio en busca de una verdad que todavía se me escapa.

BOGOTÁ, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 1991. Almuerzo con un hombre que conoce bien el tema del Palacio de Justicia: hijo y nieto de dos ex presidentes colombianos, Juan Manuel López Caballero es miembro de la élite histórica del país. Ha vivido en Europa durante varios años y, cuando regresó a Bogotá en 1986, pocos meses después del ataque de la guerrilla del M-19 al Palacio, encontró que todos los miembros de la «clase dirigente» que lo rodeaban estaban comprometidos con tapar y distorsionar lo que había pasado. A Juan Manuel el clima de negación y represión local le resultaba sofocante. Se obsesionó por descubrir y clarificar la verdad. Los resultados del ataque no eran cuestionables; pero la verdad de lo que en realidad ocurrió minuto a minuto dentro y alrededor del Palacio de Justicia sitiado –mientras el edificio y muchos de sus más ilustres ocupantes eran inmolados por los proyectiles y las bombas–, esa verdad sólo se podría descifrar en los detalles. Y fueron precisamente esos detalles los que se habían vuelto misteriosos, insondables y ojalá irreconocibles por obra de los escribanos de la versión oficial de estos acontecimientos.

Juan Manuel dice que le tomó ocho meses escuchar todas las cintas, explorar todos los videos, leer todos los informes pe-

riodísticos y las entrevistas y estudiar todos los discursos oficiales: los del presidente Belisario Betancur en la Catedral Primada y en el Senado, y los de los ministros de Defensa, Justicia y Gobierno. Dedicó semanas a estudiar los debates del Congreso y a sumirse en los interminables testimonios que los soldados y los sobrevivientes dieron a los investigadores del Tribunal Especial de Instrucción. Pero fue sólo cuando escuchó la cinta con la voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, hablando por teléfono en transmisión en vivo por la radio desde su oficina en la Corte apenas horas antes de su muerte, que Juan Manuel descubrió el alcance de las manipulaciones de la «versión oficial».

La voz del magistrado, cuando la oí *–dice–*, no era la voz de un cobarde gritando auxilio, como me lo habían descrito. El hombre era magnífico. Su voz, su mensaje eran la esencia misma de la racionalidad.

Yo tampoco logro olvidar el impacto de esa voz. Al igual que la población de Bogotá esa tarde del 6 de noviembre de 1985, escuchaba los reportajes radiales en vivo desde la escena de la contienda, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando por teléfono con un reportero desde su oficina del cuarto piso en el epicentro mismo de la batalla le contó a la nación paralizada que no había podido contactarse con el presidente de la República y que, a menos que alguna autoridad le diera la orden al Ejército de detener el fuego para permitirle negociar con la guerrilla que lo tenía como rehén, iba a haber una masacre. Y comprendo a Juan Manuel porque tampoco olvido cómo me conmovió el control y la innata cortesía de esa voz del magistrado Alfonso Reyes en aquel momento tan desesperante.

Y también me acuerdo que sólo dos días después de su muerte, cuando el establecimiento estaba reagrupándose en torno al presidente Betancur que inventaba excusas por no haber tomado el teléfono para responder los repetidos llamados de auxilio

del presidente de la Corte, el primer blanco en el que enfocó su indignación fue justamente esa transmisión de cuatro minutos por radio. El recuerdo de esa voz seria y urgente –que ya no podrían ni silenciar, ni borrar de la memoria de todos quienes la oyeron– tenía que ser distorsionado, desacreditado. Sí, me acuerdo de la frustración de aquellos bogotanos empeñados en que el mundo entero aceptara la versión oficial de la masacre.

¡Ay! ¡Qué horror! –*se decían unos a otros*–. Un magistrado de la Corte Suprema... ¡Ay, pobre hombre...!, ¿te imaginas? ¿Para que un juez estuviera tan histérico? Por supuesto, ¡estaba enloquecido! Si es obvio que esos «animales» tenían una pistola apuntándole a la cabeza... Lo obligaron a decir lo que dijo.

* * * * *

Se me dificulta encontrar a la gente. Al parecer, todas las personas que necesito ver han cambiado sus números telefónicos. Algunos se han mudado a edificios más seguros. Muchos ya no están en sus mismos empleos. Un buen número de los periodistas mejor informados e independientes que me ayudaron cuando vine en mayo de 1986 ha tenido que salir del país. Desde Nueva York veía sus nombres aparecer en las macabras «listas de la muerte», que comenzaron a circular poco después de la toma. Desde entonces han sido asesinados cuatro candidatos a la Presidencia y los colombianos ya se han acostumbrado a utilizar la palabra «magnicidio» para señalar la matanza de sus grandes hombres o de quienes hubieran podido llegar a serlo. Aquellos que salen al escenario público a ofrecer un soplo de esperanza personifican de inmediato ese fenómeno colombiano cuya expresión refleja García Márquez. Entran a hacer parte de las filas de «muertes anunciadas», esos asesinatos a punto de ocurrir, como en la novela que lleva

Capítulo I

Antecedentes

El séptimo hijo de un campesino bananero sin tierra, oriundo de la costa Caribe de Colombia, viaja a Bogotá, la capital del país, donde se convierte en un exitoso abogado laboralista, un congresista popular y, en su madurez, en uno de los fundadores y líderes guerrilleros del movimiento revolucionario M-19.

Poco antes de las siete de la noche del martes 5 de noviembre de 1985, Andrés Almarales entró a afeitarse el bigote en el baño del pequeño apartamento que compartía con su compañera. Sus objetos personales ya estaban empacados: dos mudas de ropa interior, medias y un par de camisas limpias. La vestimenta era importante para Andrés: tenía clara la intención de estar bien presentado frente a las cámaras de televisión en los días históricos que se avecinaban. María e Iván –hijo del primer matrimonio de Andrés– iban camino al parqueadero a traer el automóvil de Iván. En media hora se encontrarían en una esquina detrás de su edificio para dirigirse al lugar donde los compañeros estarían esperándolo. Allí cambiaría de vehículo y seguiría para encontrarse con el resto de la fuerza de asalto del M-19 en la casa que les servía de escondite y donde pasarían la noche antes de la invasión al Palacio de Justicia la mañana siguiente.

Salvo alguna eventualidad, la suerte estaba echada. Ya era demasiado tarde para dudar. No obstante, todavía recordaba la cuchillada de miedo, la sensación de vacío en el estómago cuando Álvaro Fayad, comandante supremo del M-19, le había hablado de su plan de tomar como rehenes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado dentro del Palacio de Justicia, además de pedirle que participara en el asalto. Había

sido incapaz de negarse. Fayad le explicó que el M-19 necesitaba de su presencia allí, porque su reputación y su idoneidad como el más importante estadista de la organización serían decisivos en el desarrollo de la acción política más ambiciosa que ningún movimiento revolucionario colombiano hubiera intentado jamás. La operación del Palacio de Justicia requería del peso y la respetabilidad de los mejores cerebros legales y políticos del M-19 –había dicho Fayad–, porque una vez los guerrilleros capturaran y aseguraran el edificio, el éxito de su empresa dependería de la habilidad y la sofisticación de sus abogados y representantes. Todo el mundo sabía que Andrés Almarales era uno de los mejores negociadores, y el M-19 y la nación lo necesitarían para liderar las posteriores conversaciones con el Gobierno.

Por eso Andrés había dicho que sí, a sabiendas de que cada instinto de su ser le indicaba que la idea estaba condenada al fracaso. Pero se rehusaba a seguir la voz de alerta de su cabeza. Esa voz –se decía– no es más que la cobardía inaceptable de un hombre que envejece. Y fuera lo que fuera, Andrés Almarales no era cobarde. Era un berraco, un revolucionario, un comandante del M-19. Y aunque a veces se sintiera como el abuelo de esos jóvenes a quienes les brillaban los ojos ante la perspectiva de un enfrentamiento cinematográfico con el Gobierno colombiano, en realidad él sí tenía una misión crucial en este asunto. Los compañeros lo necesitaban. La causa a la que había dedicado toda su vida lo necesitaba.

Además, nunca lo puso en duda. Ni siquiera había tratado de jugar el papel de abogado del diablo porque sabía que Fayad y los demás miembros del Comando Superior no lo iban a escuchar. Cinco meses atrás, cuando había tomado partido contra el rompimiento de la tregua y suplicado a sus compañeros por permanecer dentro del proceso de paz y mantener el diálogo abierto con el Gobierno, fue derrotado en la votación. Ahora estaba de acuerdo, porque no tenía otra alternativa. El M-19 estaba contra la pared y, por primera vez en su vida, Andrés había perdido confianza en su propio criterio. No tenía respuestas. La tregua había